

Los costos sociales de la política de seguridad democrática

HEBER HERNÁNDEZ AYAZO

Profesor Escuela de Economía UPTC

JAIME BERMÚDEZ GUERRERO

Profesor Escuela de Administración UPTC

RESUMEN:

El diagnóstico de la estrategia “Seguridad Democrática” del Plan, ignora y desconoce las causas sociales, económicas y políticas que dieron origen al levantamiento armado y a la organización político-militar de la insurgencia, pues plantea que la causa fundamental de los problemas sociales y de violencia del país se deben a la existencia del narcotráfico y a las posibilidades de financiación que de allí se derivan para la insurgencia y el paramilitarismo. En estos términos la solución no puede ser otra que la imposición de un radicalismo militar extremo que de antemano desprecia toda forma de negociación política. Esta manera de abordar los problemas de la sociedad colombiana se discuten en el presente artículo, mostrando su naturaleza social, política y económica; por lo cual las soluciones deben estar enmarcadas en este mismo contexto y no se deben reducir a una propuesta exclusivamente militar. La reflexión finaliza con un breve balance sobre lo que ha significado la “Seguridad Democrática”, mostrando que la estrategia para liquidar toda forma de manifestación de violencia e insurgencia armada son las reformas estructurales en la sociedad y el Estado.

Palabras clave: conflictos sociales, económicos y políticos, insurgencia, negociación política, seguridad democrática, paramilitares, paz, plan de desarrollo, reformas estructurales.

ABSTRACT:

The diagnosis of the strategy “democratic security” ignores the social, economic and political causes that began the armed rising and the politician and military organization of the insurgence. This outlines that the fundamental cause of the social problems and violence are due to the drug traffic existence and the financing possibilities derived for the insurgence and Para militarism. In these terms the solution is the imposition of a extreme military radicalism that rejects of political negotiation. This way to approach the Colombian Society problems is discussed in this article showing its social, political and economical nature. For that reason the solutions should be framed in the same context and these should not decrease to a military proposal. The reflection concludes with a brief balance about democratic security showing that the structural reformations are the strategy to liquidate all violence manifestation and armed insurgence in the society and the state.

Key words: social conflicts, economics and politics; diagnostic; insurgence; politic negociation; democratic security; para militares; peace; development plan; structural reforms.

Introducción

El presente texto fue presentado por los autores a manera de ponencia en el Octavo Congreso de Planeación Participativa, realizado entre el 4 y el 7 de febrero de 2004 en la sede de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín.

Con esta sucinta reflexión los autores se proponen organizar algunas reflexiones críticas sobre la formulación de la Seguridad Democrática en el Plan de Desarrollo e insinuar aproximaciones en torno a las reacciones surgidas en la sociedad civil, en relación con el modelo de solución del conflicto armado.

En primer lugar se hace una referencia sobre los antecedentes inmediatos que dieron origen a la propuesta de la política de seguridad democrática, que no son otros que el descalabro que significó el frustrado proceso de paz y la zona de distensión, que el gobierno de Andrés Pastrana fue incapaz de llevar a buen término.

A continuación se examina el diagnóstico que subyace en el Plan de Desarrollo sobre el conflicto armado, precisando que las causas de injusticia y desigualdad social y de exclusión política que han caracterizado a la sociedad colombiana en los últimos cincuenta años, son ignoradas en el diagnóstico que da

cuerpo a las estrategias de la Seguridad Democrática.

En tercer lugar se presenta un balance preliminar, haciendo salvedad del ocultamiento y a veces incoherencia de las cifras que el gobierno presenta a la opinión pública en materia de seguridad, en donde la seguridad sobre todo está orientada a mantener el “confort y estatu quo” de las capas más privilegiadas de la sociedad colombiana.

Como último punto de análisis se enfatiza la necesidad que tienen los sectores marginales más desprotegidos del país, de que el Estado asuma la realización de reformas estructurales en lugar de las soluciones por la vía militar que actualmente desarrolla el gobierno de Uribe Vélez, como se propone en la Seguridad Democrática, pues aquellas y no éstas son la única estrategia para liquidar toda manifestación de violencia y de insurgencia armada.

1. Antecedentes inmediatos

El revés experimentado con el interés de lograr la paz en el gobierno anterior, haciendo converger los esfuerzos gubernamentales en torno a una zona de distensión como método para inicio y consolidación de los procesos de paz, en un modelo que se rompe seis meses antes de ser elegido el actual presidente, provoca un giro radical en

la política interesada en la recuperación del orden institucional.

De una concepción fundada en el diálogo, mediante la creación de una zona de distensión y la elaboración de agendas para la negociación, se transita a un modelo que se aleja de este marco y organiza las estrategias desde la perspectiva de la confrontación radical de carácter militar, dejando un débil resquicio a la posibilidad de modificar el esquema en el evento que las fuerzas insurgentes y demás organizaciones ilegales armadas replanteen las posiciones que dieron origen al rompimiento de las conversaciones en el periodo anterior.

Independiente de los modelos políticos pensados para la recuperación del orden, lo evidente es que cada vez más el gobierno se persuade que es un aspecto prioritario de la vida nacional proponerse la recuperación del orden explorando diferentes vías, que van desde el pacto de un acuerdo negociado hasta la confrontación militar abierta y sin fronteras, para la recuperación de las formas de convivencia pacífica en la sociedad colombiana.

En este orden de ideas y con el antecedente juzgado por un gobierno que discrepó del modelo de la acción negociada, dado el caudal de respaldo de una votación a favor de un candidato liberal disidente, que basó

su campaña en el planteamiento de un combate frontal y sin tregua contra las fuerzas irregulares de carácter armado, interpreta por consiguiente que esta expresión tenía que convertirse en el fundamento del nuevo plan de desarrollo nacional, que a la letra recoge su espíritu en la declaración de objetivos estratégicos de la Seguridad Democrática del Plan de Desarrollo.

En efecto, en el Plan “Hacia un Estado Comunitario”, brindar seguridad democrática se convierte en el eje fundamental sobre el cual deben girar las demás propuestas estratégicas y se reconoce que “en última instancia, la Seguridad Democrática pretende asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la legitimidad del Estado”. De manera que lograr ésta aspiración implica como condición irrenunciable “el fortalecimiento de la fuerza pública para recuperar el control del territorio y proteger la infraestructura nacional (...) lo cual demandará ingentes recursos fiscales y una activa participación de la comunidad internacional. Pero más que ello requiere un compromiso cabal de todo el país. En suma, la seguridad democrática es para todos y necesita de todos” (Plan de Desarrollo).

Esta decisión política se quiso legitimar a través de un instrumento constitucional que por primera vez se aplicó, como es el Referendo, de modo que fortaleciera una posición del

Estado en donde se exigía que la sociedad en general y, en particular los más pobres, legislaran en contraposición a sus intereses salariales y relativas condiciones de bienestar hasta ahora alcanzado, para con ello, también demostrar que el modelo de la guerra con todos sus costos no corresponde a una posición de gremios empresariales y del gobierno, sino que es un modelo y una causa nacional.

Contrario a ésta percepción el gobierno, como en un acto de soliloquio, se estaba escuchando a sí mismo por cuanto que de un potencial de 24 millones y medio de ciudadanos, una exigua cifra –menor del umbral exigido por la Constitución– participó de esta iniciativa, que ahora queda sin respaldo nacional y que por supuesto deslegitima las arterias del Plan de Desarrollo.

El costo no solamente político sino económico es cruel y brutal, pues no han pasado muchos días cuando ahora arrecia otra batalla que tiene naturaleza tributaria y de ahorro fiscal, para fortalecer de manera irrestricta el proceso de la guerra.

Con el saldo dramático de ahora estar expuesto a perderse no solamente una sino dos guerras. La primera interesada en un arrasamiento para liquidar toda expresión de conflicto armado irregular y la segunda que será la que perderá la sociedad civil y, de

ella, el segmento más deleznable como es la gran masa empobrecida sin empleo, sin salud y sin educación, que no son los que están articulados a las estructuras del poder político sino los que están en las grandes periferias del país y de las ciudades colombianas.

En cuanto a la primera antes señalada, la guerra es poética y hay que hacerle apología desde las clases sociales y grupos en particular que no son golpeados por la confrontación armada, pues los hijos del sector financiero, del sector productivo industrial, de los grandes representantes del comercio y de los empresarios poderosos, no estarán en las primeras ni en las últimas filas del combate abierto al cual convoca esta guerra. Ellos están a salvo y la inseguridad democrática, de la segunda guerra, será para el que tenga que convivir en los campos minados y en los pueblos bajo influencia y control de la insurgencia, o porque fueron reclutados para actuar en oposición a su ideal de sociedad.

2. El diagnóstico

Con toda la precaución debida conviene plantear aquí un interrogante: ¿hasta qué punto el diagnóstico recibe como imposición *a priori* el planteamiento surgido de un radicalismo extremo? o ¿hasta qué punto la seguridad democrática se infiere como una ineludible prioridad que se desprende del examen de la historia precedente?

Se trata de establecer quién condiciona o determina a quién, y ésta discusión es interesante porque la lectura de la Seguridad Democrática colocada como necesidad impostergable, de primer orden, implica que todos los demás elementos que participan en la concepción del Plan de Desarrollo, tienen que vertebrarse en torno al núcleo de la Seguridad Democrática allí concebida.

Si esta es la prioridad indiscutible entonces se comprende que el crecimiento económico, el incremento de los recursos fiscales del Estado, la ampliación de las tasas de empleo, la accesibilidad a los canales de la salud y la educación, se reflejarán en una expansión de su cobertura y, seguramente, el objetivo de derrotar la pobreza extrema encontrará posibilidades que la justifiquen, reclamándose un sacrificio enorme que acepte que se drenen y desplacen los recursos asignados a estos aspectos, en favor del fortalecimiento de las estrategias que conducirán en el breve lapso de cuatro años a liquidar las formas de violencia o de toda manifestación de insurgencia, así como a la recuperación y consolidación del orden.

En este diagnóstico, con un fuerte énfasis en la confrontación militar, se oculta la necesidad de un análisis etiológico que rastree en el curso de la historia los orígenes de las formas diversas y, en particular, de la violencia y del conflicto político.

El diagnóstico del Plan de Desarrollo lo que significa es una concepción sutil que busca con la Seguridad Democrática actuar sobre los efectos y no sobre las causas, porque seguramente si escamotea en el origen de las causas se abrirían las demandas radicales a fin de reclamar reformas estructurales, que consigan remover aquellas condiciones que en el país han configurado una sociedad con profundas desigualdades entre las clases y los grandes segmentos de la población colombiana.

Las causas del conflicto armado colombiano de los últimos cincuenta años tienen su origen en los hechos que propiciaron la creación de los movimientos guerrilleros surgidos en la mitad del siglo anterior, como una respuesta campesina a las persecuciones del gobierno conservador contra el partido liberal en los campos del país, aunque estas persecuciones más tarde fueron apoyadas soterradamente por las directivas políticas del liberalismo.

De todas maneras tal persecución política permitió la ampliación y consolidación de la expansión capitalista de la agricultura y del latifundio tradicional, que es una de las prácticas que ininterrumpidamente han subsistido en el sector primario de la economía, generando millares de masas campesinas expulsadas violentamente y desplazadas de sus parcelas y territorios, que hoy

deambulan errantes por todo el territorio nacional. Quiere decir que la historia conoce los primeros desplazados por causas no de una insurgencia de izquierda de ese tiempo, sino por una fuerza subversiva tradicional que disputaba el control político nacional.

Es muy posible que las infamias, persecuciones y muertes, muchas de ellas ocasionadas con la complacencia del establecimiento aún después de las amnistías (como el caso de los líderes amnistiados de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales y posteriormente los militantes, dirigentes y simpatizantes de la Unión Patriótica), hayan actuado como gérmenes de una patología violenta, que sumada a las profundas injusticias sociales y económicas, derivaron en la reacción insurgente de los llamados campesinos bandoleros.

Insurgencia que se expande muchos años después de iniciado el Frente Nacional y que, a mediados de la década de los sesenta, se constituye en un acelerado proceso beligerante mediante la fundación de las llamadas repúblicas independientes establecidas en los territorios de Marquetalia, El Pato, Guayabero, Róchiquito y las proximidades de La Uribe y La Macarena, controlados por la organización guerrillera que hoy aparece fortalecida y denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.

Lo interesante de este recuento histórico es precisar las causas de índole social, política, económica e institucional que propiciaron y dieron vigor a los grupos insurgentes. En forma general se pueden mencionar las siguientes:

– Una situación de marcada exclusión política, acentuada por la violencia entre liberales y conservadores del medio siglo y una hegemonía en el manejo del poder legitimada a instancias del pacto político bipartidista del Frente Nacional.

– La realidad socioeconómica del país traducida en una preocupante injusticia social (niveles elevados de pobreza rural y urbana, acompañados de altos índices de analfabetismo y desempleo) y una marcada desigualdad económica (alta concentración de la riqueza, latifundistas y terratenientes, monopolios extranjeros apropiadores de los recursos naturales, baja remuneración y explotación de la fuerza de trabajo, niveles preocupantes de inflación).

– La situación de la justicia en permanente crisis, que significa una elevada impunidad frente a la corrupción, frente al clientelismo y, unos años más tarde, frente al narcotráfico y sus relaciones con las élites sociales y buena parte de la dirigencia política nacional.

– La crítica situación institucional del país, especialmente de los organismos

gubernamentales, manifestada en una baja presencia del Estado en la atención de servicios públicos en las zonas rurales, así como en las zonas marginales urbanas, que conlleva la existencia de un Estado débil y endémico incapaz de controlar la violencia y de mantener el orden público, como tampoco de mantener efectivamente las garantías democráticas formales promulgadas por la Constitución Política.

Entonces, observando la realidad socio-económica actual del país, se puede evidenciar que las causas que dieron origen al conflicto político armado en Colombia continúan vigentes y, a manera de corolario, se podría aseverar que mientras ellas persistan no habrá condiciones propicias para que la paz sea una realidad nacional

3. Balance en la gestión de la seguridad democrática

Con todas las limitaciones de información de calidad que existe para hacer una evaluación de la gestión, pues solo se cuenta con la información emitida por los medios de comunicación masiva y como además no está sistematizada, procedemos entonces a abandonar el propósito de realizar un balance cuantitativo y minucioso de los resultados obtenidos hasta los días de hoy, en lo que concierne a la Seguridad Democrática.

Pero el hecho que la opinión pública no cuente con información veraz no significa que ella no exista y a lo mejor se trata de información reservada, pero en todo caso con datos o sin ellos el balance obliga a establecer las siguientes relaciones.

Si las acciones de la fuerza pública traducidas en: incremento en las acciones operativas, creación de los batallones de alta montaña, unidades especializadas para controlar la infraestructura nacional de gasoductos, oleoductos, torres de energía y carreteras, acciones de inteligencia militar, redes de informantes, desertiones para la reinserción con los beneficios judiciales del caso, **están correspondidas con un saldo favorable en lo concerniente a:** disminución de acciones de violencia, liquidación de frentes y detención de la dirigencia insurgente, número de bajas, heridos y detenidos tanto en combate como fuera de él, recuperación del territorio nacional y disminución de las acciones de hostilidad, **entonces habría elementos para pensar en unos términos relativamente optimistas.**

Lo anterior implica que si las correlaciones formuladas coinciden con el objetivo de la Seguridad Democrática se podría hablar de un balance provisional favorable; por el contrario si los resultados no son claros, se podría afirmar que se debe revisar el diagnóstico y las estrategias que convirtieron a la seguridad

nacional en el núcleo central, de una política de Estado que es altamente cuestionable por sus resultados.

Además, también habría que hacer el balance de las acciones con éxito en el rescate de secuestrados; hacer la contabilidad del volumen de cuentas intervenidas y la expropiación de esos dineros a favor del Estado, en tanto que son fuentes de financiación de los grupos alzados en armas. Igualmente habría que verificar cuál es el costo de las operaciones de fumigación aérea de cultivos ilícitos y la magnitud de hectáreas destruidas.

Al lado de esta información habrá necesidad de establecer si el reclutamiento de la insurgencia, ha disminuido a puntos en donde se pudiera afirmar que los nuevos ingresos de efectivos no alcanzan a compensar las bajas sufridas en sus acciones de combate, pues en este evento la magnitud de los ejércitos regulares de los insurgentes habrían perdido capacidad tanto ofensiva como militar, cuestión que no es posible juzgar por la carencia de datos. Sin embargo recientemente los generales Jorge Mora Rangel, Teodoro Campo y Carlos Alberto Ospina, manifestaron que la insurgencia ha tenido un serio revés, pero que dista mucho de estar derrotada.

Dada esta evaluación habría que establecer desde una primera perspectiva si el ingente esfuerzo que se le pide a

los asalariados, a los pensionados, a los servicios de salud, a los centros de educación pública, a los actores que deben pagar los alimentos, vestuarios y drogas más caros por efecto del IVA, si las restricciones severas que los aboca están correspondidas con un estado de mayor seguridad, en lo que concierne al carácter de violencia; pero seguramente la respuesta no obre en favor de un saldo positivo para los partidarios del modelo de confrontación abierta.

También habrá que preguntarse, desde un modelo matemático, en quiénes ha incidido más la Seguridad Democrática, porque lo cierto es que no afecta de una manera homogénea con igual intensidad a los diferentes grupos sociales. Probablemente los receptores de mayor seguridad son quienes menos han sido incididos por el sacrificio, las privaciones y las disminuciones en sus niveles de vida, que ha generado el modelo militar de la guerra.

Quiere decir que es una relación inversamente proporcional: quienes más pagan la seguridad son quienes menos expuestos están, y a quienes más hay que brindarles seguridad son los que menos incurren en costos en términos proporcionales a sus ingresos, patrimonios y acumulaciones de capital.

Pues la seguridad para prevenir las acciones de violencia urbana en

centros recreativos, comerciales y sectores residenciales difiere de la que existe en las áreas marginales, que son menos vulnerables objetivamente; lo que ocurre es que todo el dispositivo militar se desplaza y concentra para proteger las áreas de desarrollo urbano y los que menos expuestos estaban se convierten en los más vulnerables, como ocurre con las gentes de Bojayá en el Chocó, Chita, El Cocuy y Soatá en Boyacá, como también Arauquita, Arauca, Tame en Arauca, Miraflores en Guaviere, Santa Rosa, Bolívar, Balboa, Jambaló y Silvia en el Cauca o los poblados de Nariño, del Huila, de Caquetá y tantos otros territorios de la Nación.

Curioso, en la Seguridad Democrática los más pobres subsidian a los más ricos. Pues el impacto derivado de este modelo en términos de vidas humanas cobradas, pérdidas económicas sufridas por la población, recursos económicos transferidos de la salud y la educación, no justifican las reformas tributarias, las cargas impositivas de asalariados y pensionados, el recorte de la inversión social, los despidos de empleados estatales y el costo de la deuda externa para sostener la guerra.

De otra parte, el número de muertos por más pequeño que sea en la sociedad civil, en las fuerzas armadas colombianas o por el aniquilamiento de la insurgencia, jamás se constituye en prueba del éxito de un modelo

político y mucho más, si la guerra culmina y morimos los que quedemos como sobrevivientes por el impacto de la otra guerra, que nos habrá dejado una sociedad envuelta en la pobreza más extremada, sin empleo, sin educación y sin salud, esperando otra muerte tan igual a la anterior.

4. Reformas estructurales: estrategia única para liquidar toda manifestación de violencia y de insurgencia armada

Es posible que el modelo de diálogo y la zona de distensión, que corresponde en la versión del gobierno anterior a la seguridad democrática, hayan marchado no con el interés de consolidarlo en el curso de su desarrollo sino con la intencionalidad de debilitarlo, porque las demandas de reformas estructurales se hubieran abierto paso con el respaldo irrestricto de la sociedad civil, al contar con las simpatías de países que conforman el orden internacional –ONGs, ONU- y muchas más expresiones de solidaridad diversa.

Estas demandas las corrobora el protocolo presentado por la élite de intelectuales, quienes tuvieron la iniciativa de preparar el documento de San Francisco de Los Pozos (finales de 2001), el cual estaba anunciando los pasos que seguirían a continuación del acuerdo bilateral del cese total de

hostilidades, a ciudadanos y comunidades del país, a cambio de efectuar las profundas reformas en la estructura del Estado.

Lo extraño es que el giro político en los métodos de recuperación del orden, varía al extremo que en el marco de la Seguridad Democrática cobran preeminencia los ajustes políticos intrascendentes, que obvian las demandas irreconciliables en el seno de la sociedad para que en el país se plantee una reforma a fondo en lo que concierne a la estructura política y social del Estado.

Esta vía se aleja y se posterga, como ha sido en la historia colombiana, cuestión que lo corrobora en los días recientes la decisión de apelar a una consulta nacional que no conquistó simpatía alguna, porque más que recoger el espíritu de aspiraciones hacia el mejoramiento social de los sectores pobres de Colombia, por el contrario exigía más sacrificios sin provocar una leve modificación en las rígidas estructuras político-sociales del país.

Ahora bien, en el evento más optimista pero remoto que se pudieran conseguir resultados indiscutibles en el campo militar e, incluso, se llegara a reducir de una manera absoluta a las fuerzas insurgentes, en ausencia de reformas estructurales del Estado, se habrán profundizado las condiciones de miseria y las desigualdades de ésta

sociedad. Lo cual quiere decir que es un balance lánguido, porque todo proceso de victoria militar en estas condiciones, crea formas más agigantadas de desarrollo de otras manifestaciones de violencia futura.

En otros términos, resolver un conflicto histórico y profundo de naturaleza estructural por la vía de la guerra, sin concesiones so pretexto de alcanzar la paz, es al propio tiempo el triunfo para la guerra futura. La paz conseguida en los términos de la seguridad democrática es igualmente la guerra modelada para las próximas décadas, si esa paz no es el resultado de una especie de nuevo contrato social, que significaría un consenso amplio y generalizado entre todos los segmentos y organizaciones de la sociedad.

A la luz del Plan de Desarrollo quiere decir que puede haber paz sin consenso social, porque el aparato militar es tan poderoso que impide formas de protesta y de reclamaciones como ha ocurrido en nuestra historia y, en ese sentido, se obvian las reformas estructurales que son imperativas.

Pero una paz que obvie y desestime en su logro la vía militar, aboca la sociedad colombiana al diálogo, al consenso y al pacto de un nuevo orden que seguramente implicará una reforma estructural, pero que no sería la paz que concuerda con los intereses

de otros sectores, que quieren conservar el mantenimiento de privilegios sin reformas y sin dificultades algunas.

Finalmente, a manera de conclusión, es de considerar que un modelo en la búsqueda de la paz, que desestime las estrategias que pueden conducir a escalar con más agresividad los términos de la guerra actual, debe ser de diálogo y concertación similar al que se abre paso en amplios sectores de la sociedad civil colombiana, como en aquellos más golpeados por los reclutamientos directos de la confrontación.

El último pronunciamiento nace de intelectuales vinculados a las ONG y de la simpatía de representantes de gobiernos de países solidarios, que ven en este modelo y en la presencia de la sociedad civil la fuerza para el triunfo no de la guerra, sino del mo-

delo del diálogo. Este pronunciamiento, de una simpatía generalizada, está recogido en el documento “Colombia, Callejón con salida”, que significa que desde la perspectiva del diálogo y la concertación hay porvenir en Colombia, mientras que desde la Seguridad Democrática que se traduce en la confrontación militar abierta es la catástrofe total.

En este mismo orden de ideas cabe recordar que Koffi Anan, Secretario General de las Naciones Unidas, con toda su experiencia en el tratamiento de los conflictos más radicales del mundo contemporáneo, ha reiterado en días pasados la preeminencia del modelo de conversaciones para conseguir la paz, no solamente en Colombia al que mencionó directamente, sino en todas las partes del mundo donde haya conflictos de naturalezas similares a la nuestra.

Bibliografía

- Caroline, Moser. “Las condiciones socioeconómicas por la paz en Colombia”. [carolinemoser.pdf_de_www.revistainterforum.com/](http://www.carolinemoser.pdf_de_www.revistainterforum.com/)
- Córdoba Ruiz, Piedad. “El Plan Colombia: el escalamiento del conflicto social y armado”. www.derechos.org/mizkor/colombia/doc/cordoba.htm/
- Consejo Nacional de Planeación. “Colombia se pronuncia sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2002–2006”. Ed. Guadalupe. Bogotá. 2004.
- Departamento Nacional de Planeación. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “HACIA UN ESTADO COMUNITARIO. Bogotá. 2003.
- DECLARACIÓN DE BOGOTÁ. CONTRA LA GUERRA IMPUESTA. Agosto 2001. www.mamacoca.org/mizkor/colombia/ya/confarm.1htm
- DOCUMENTO DE PAZ EN COLOMBIA. “paz, derechos humanos y DIH”. Octubre 2000. www.ciponline.org/colombia/pazcolpeaceandhr.htm
- Equipo Nizkor. “Conflicto armado y paramilitarismo en Colombia”. www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm.1htm/
- Ocampo, José Antonio. “Entre las reformas y el conflicto”. Ed. Norma. Bogotá. 2004.
- PNUD-ONU. “El conflicto colombiano: callejón con salida”. Diferentes articulistas. Bogotá. 2003.
- Vargas Velásquez, Alejo. “El gobierno Uribe necesita oposición”. www.redunipaz.com
- _____, “La realidad del conflicto colombiano”. www.redunipaz.com

